

## **RELATORÍA JURÍDICA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI**

Jueves 05 de Marzo de 2015

### **Sin decisión judicial, autoridades no deben autodeclararse responsables y extender jurisprudencia**

El pago de una indemnización por parte de cualquier entidad estatal requiere un pronunciamiento o fallo de un juez administrativo que encuentre suficientemente probada la responsabilidad del Estado, recordó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

El hecho de que una sentencia de unificación del Consejo de Estado se refiera a la indemnización de perjuicios en eventos de graves violaciones a los derechos humanos no implica que las autoridades deban autodeclararse responsables y extender, sin declaración judicial previa, sus efectos a casos similares, pues, en el debate probatorio, puede demostrarse, por ejemplo, la inexistencia de un nexo causal o una causal eximente de responsabilidad.

En el asunto analizado, la agencia se refirió a la Sentencia 05001232500019990106301 (32988) del 2014, sobre la cual se solicitó concepto previo de extensión de jurisprudencia. Según indicó, en esa decisión se estudió la responsabilidad del Estado a partir de una falla del servicio por acción de la fuerza pública, mientras que la solicitud de extensión se refería a una presunta falla del servicio por omisión, frente a la comisión de delitos por un grupo armado ilegal.

Además, el apoderado de los solicitantes pedía una indemnización de perjuicios por daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la vida de relación, pero no que se le concediera una reparación integral, ni la aplicación de la regla de excepción en materia de indemnización de daños morales, que fueron objeto de la sentencia de unificación.

De acuerdo con la ANDJE, la solicitud no cumplió los presupuestos establecidos en el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para que las autoridades extiendan la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo del artículo 5º del Decreto 1365 del 2013, que definió los procesos en los que interviene la agencia, señaló que le corresponde a la Policía Nacional, en

su calidad de autoridad administrativa competente en el asunto analizado, valorar las pruebas y verificar los supuestos de hecho del caso.

(Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Concepto 20141030086871, dic. 23/14)

---

### **Recuerdan qué normas señalan los factores salariales que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión de jubilación**

El artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6º del Decreto 691 de 1994, se debe aplicar para determinar los factores salariales con los que se debe liquidar la pensión de jubilación de los servidores públicos que consoliden su derecho en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993.

Así lo señaló la Corte Suprema al recordar que desde las sentencias 17192 del 2002, 44206 del 2012 y SL-1851 (42208) del 2014, para determinar los factores salariales integrantes del ingreso base de liquidación (IBL) se aplica la norma vigente al momento que se causa el derecho.

En el caso analizado, el trabajador consolidó su derecho a la pensión de jubilación el 19 de noviembre del 2004, fecha en que cumplió los 55 años de edad y, desde este punto de vista, el tribunal no se equivocó al determinar que los factores salariales con los cuales debía liquidarse su pensión eran los previstos en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.

Finalmente, advirtió que los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que las condiciones pensionales de edad, tiempo y monto se rijan por las disposiciones anteriores que les resulten aplicables, no así el ingreso base de liquidación, el cual se encuentra regulado de manera expresa en la Ley 100 de 1993 (M. P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo).

(Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL-17476 (45074), 12/10/2014) Noticia generada en Mar. 4/15 (2:27 p.m.)

---

## **Garantía única de cumplimiento no puede constituir fuente de enriquecimiento**

El Consejo de Estado se pronunció en relación con la garantía única de cumplimiento, en un caso en el cual una entidad del Estado hizo efectiva la póliza de calidad y correcto funcionamiento de los equipos, precisando que el monto a que debe ser objeto de indemnización por parte del asegurador no necesariamente debe corresponder al valor asegurado, sino que debe ser aquel que resulte del daño o perjuicio efectivamente ocasionado al patrimonio del acreedor.

En este sentido, se indicó que la entidad estatal no puede cuantificar el perjuicio a su arbitrio; sino por el contrario, la estimación del daño debe ser fundamentada, debe quedar claramente establecida en el correspondiente acto administrativo y, por regla general, debe guardar estricta consonancia con los daños patrimoniales sufridos por la entidad estatal, como consecuencia de la realización del riesgo asegurado.

Así mismo, en la providencia se manifestó que la garantía única de cumplimiento sólo comprende el daño emergente y, el lucro cesante por regla general no es susceptibles de ser indemnizado como tampoco los perjuicios inmateriales (perjuicios morales, alteración de las condiciones de existencia, etc.).

---

## **Liquidación de los contratos del estado, salvedades incorporadas por las partes**

Si las partes suscriben de mutuo acuerdo un acta de liquidación sin incorporar salvedades, con posterioridad las mismas no puede recurrir a la acción contractual con el fin de pretender reconocimientos frente a las cuales no realizó reparo alguno en la oportunidad debida.

En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado advirtiéndolo, en el caso a considerar, que si el contratista presentó una petición de reintegro de unas sumas de dinero y esta fue denegada por la Administración mediante un acto administrativo, no puede ahora pretender que por vía de la acción contractual le sea reconocido algo que ya le fue negado a través de un acto administrativo que existe, se presume legal y está produciendo a plenitud sus efectos, el cual en su momento debió ser cuestionado judicialmente.

---

## **Clases de faltas disciplinarias según su consumación para el cómputo de la prescripción**

La dogmática disciplinaria ha diferenciado tres clases de faltas según su consumación, así: i) faltas instantáneas, ii) permanentes y iii) continuadas.

Dicha clasificación de las faltas tiene un origen penal, en donde se ha usado este criterio de clasificación para distinguir algunos delitos, derivando de dicha clasificación efectos diferentes para el cómputo de la prescripción.

El debate sobre la prescripción depende de la naturaleza de la falta. De modo general, cuando se trata de faltas de designio permanente o continuado, es decir, cuando la lesión del bien jurídico protegido por la norma sancionatoria se prolonga en el tiempo, la prescripción opera de una manera, mientras que cuando el acto sancionable se agota de modo instantáneo, en un sólo momento, la forma de fijar el primer día del término de prescripción opera de manera diferente.

Dicho simplemente, la prescripción se desencadena, luego de que la acción reprimible se agota en sí misma, pero esto último ocurre de modo diferente cuando el delito o la falta perseveran y se prolonga en sus efectos a lo largo del tiempo.

Las faltas de carácter continuado, permanente o sucesivo, en tanto se prolongan en el tiempo, siguen lesionando los bienes que la norma protege, hasta tanto se altere la situación que abrió el camino a ese estado de cosas trasgresor de la legalidad y ofensivo de bienes protegidos por el legislador.

Consejo Superior de la Judicatura- SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA- Magistrado Ponente: Dr. PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO- Bogotá D. C., primero (1) de octubre de dos mil catorce (2014)- Radicación No. 1300 11102000 2011 00391 01

---

## **Si abogado no puede asistir a diligencias por falta de recursos, no hay sanción disciplinaria**

Cuando se acredite la falta de recursos del abogado investigado, este debe ser eximido de responsabilidad disciplinaria por no acudir a las diligencias de un proceso, indicó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La corporación explicó que si bien el nivel de diligencia de los profesionales del Derecho exige que, en ocasiones, vayan más allá de lo convenido, “nadie se encuentra obligado a lo imposible”.

En el caso analizado, el jurista se dedicaba a la defensa de personas de escasos recursos, y no tenía ingresos suficientes para los gastos de traslado al lugar donde se desarrolló una diligencia penal.

“El abogado disciplinado ejerce en condiciones de notoria estrechez económica, que se reflejan en la precaria infraestructura física con la que cuenta para atender a sus clientes e incluso en la muy modesta cuantía de los honorarios que percibe”, agregó la Sala.

El investigado había sido citado, en calidad de defensor, a la audiencia de sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la condena a 23 meses de prisión a la que había sido sentenciado su cliente por inasistencia alimentaria. Como el abogado no asistió, el recurso se declaró desierto.

En la misma diligencia, el magistrado instructor le formuló cargos al defensor, con fundamento en la Ley 1123 del 2007, por faltar a su deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales. Sin embargo, la Sala estableció que el abogado no podía prever la contingencia de la falta de dinero para el viaje y, por lo tanto, no pudo renunciar a tiempo al poder o solicitar un aplazamiento.

(Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Sentencia 73001110200020100027901, nov. 12/14, M. P. Néstor Iván Osuna)

---

### **Libertad provisional no da lugar a reintegro del empleado objeto de medida de aseguramiento**

De acuerdo con el Consejo de Estado, el beneficio de libertad provisional por vencimiento de términos no da lugar al reintegro del empleado que fue objeto de medida de aseguramiento.

A su juicio, en estos eventos, el beneficio concedido al trabajador en el marco de la investigación penal responde a una decisión protectora del derecho fundamental a la libertad, como consecuencia del vencimiento del término legal para calificar el mérito sumarial.

Ello quiere decir que no hubo una decisión modificatoria sobre su responsabilidad, toda vez que la medida de aseguramiento mantuvo su fondo, habida cuenta que no fue revocada sino que el proceso penal continuó en otras condiciones de libertad para el imputado.

Así las cosas, recordó que, según el artículo 147 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270/96), ante la suspensión generada por una orden de autoridad judicial, el funcionario suspendido tiene derecho al reintegro solo cuando el proceso penal termine por cesación del procedimiento, preclusión de la instrucción, absolución o exoneración. (C.P. Gerardo Arenas Monsalve) Noticia generada en Mar. 4/15 (4:07 p.m.)

(Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 19001233100020020032501 (10362010), 11/27/2014)

---

### **Permisos sindicales no pueden afectar cumplimiento del servicio público**

En reciente oficio, el Ministerio del Trabajo precisó los límites aplicables a cualquier solicitud de permiso sindical en el sector público, teniendo en cuenta que deben valorarse los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, para no incidir negativamente en la prestación del servicio, ni en los intereses generales en que se enmarca la actividad de la administración pública.

De acuerdo con diferentes sentencias, entre ellas la T-464 del 2010 de la Corte Constitucional y la 36147 del 2008 de la Corte Suprema de Justicia, si una vez valorados estos criterios el empleador determina la impertinencia o contrariedad del permiso, ya que podría interferir gravemente en el desarrollo de las actividades laborales, puede abstenerse de otorgarlo, exponiendo las razones mediante acto administrativo.

Cabe recordar que el entonces Ministerio de la Protección Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública expedieron la Circular 98 del 2007, en la que señalaron los lineamientos que deben tenerse en cuenta para el otorgamiento de los permisos sindicales, sin olvidar que tanto el derecho de asociación como el ejercicio de la función pública tienen rango constitucional, pues el primero protege el derecho de asociación sindical y el segundo, los intereses de la colectividad.

El fundamento constitucional del permiso sindical se encuentra en el artículo 39 superior, que les reconoce a los representantes sindicales las

garantías necesarias para cumplir sus funciones, entre ellas los permisos para los empleados de los sectores público y privado.

Así mismo, la Recomendación 143 de la OIT, sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores, indica que estos deben disfrutar, sin pérdida de salario, prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la empresa. No obstante, precisa que pueden fijarse límites razonables.

(Ministerio del Trabajo, Concepto 222218, dic. 23/14)

---

### **Servidores públicos tienen hasta el 31 de marzo para presentar declaración bienes y rentas**

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) les recordó a todos los servidores públicos de las instituciones de los órdenes nacional y territorial que el próximo 31 de marzo vence el plazo para presentar su declaración de bienes y rentas, con corte al 31 de diciembre del 2014.

Esta declaración se puede diligenciar a través del formulario publicado en el portal del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) o descargando el formulario del portal de la Función Pública, que debe ser entregado en la oficina de talento humano de cada institución.

Si no se diligencia este documento, tanto el servidor como la oficina de talento humano correspondiente podrían recibir sanciones disciplinarias por no cumplir ni hacer cumplir esta obligación legal.

El DAFP aclaró que la información suministrada tiene clasificación de reservada y solo podrá ser suministrada por solicitud expresa de los organismos de control, para verificar datos en procesos disciplinarios y fiscales, o por la justicia ordinaria, para casos penales y civiles en los que se presuma la existencia de actos de corrupción.

Las entidades inscritas en el Sigep deben expedir oportunamente a sus servidores el certificado de ingresos y retenciones, y disponer de una agenda interna para el diligenciamiento del formato antes de la fecha límite.

Esta declaración es una responsabilidad prevista en la Ley Anticorrupción, que ordena a todo servidor del Estado, al momento de

posesionarse, registrar los bienes y recursos que posee, como garantía de la transparencia de sus actuaciones. Estos funcionarios también están obligados a presentar la declaración de bienes y rentas al momento de su retiro, y la declaración periódica, al 31 de marzo de cada anualidad.

---

### **Presentarse a laborar en estado de embriaguez puede constituir justa causa de despido**

Trabajar en estado de embriaguez es contrario al recto desempeño de las obligaciones laborales, y está expresamente prohibido por el numeral 2º del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo (CST).

Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia, al señalar que esa limitación tiene su razón de ser en la preservación de bienes jurídicos de significativa importancia, como la prestación del servicio en óptimas condiciones y la prevención de riesgos para la integridad del trabajador, de sus compañeros y de los bienes de la empresa.

De acuerdo con la corporación, el hecho de presentarse al trabajo en estado de embriaguez puede tener diferentes niveles de gravedad, en función de las labores que desempeñe el trabajador y del entorno profesional en el que se sitúe.

Por ello, la proporcionalidad de una decisión de despido debe examinarse en relación con las circunstancias particulares de cada caso y atendiendo factores como la labor que desarrolla el trabajador, el contexto y las condiciones medioambientales.

Así las cosas, es necesario tener en cuenta el primer literal del numeral 6º del artículo 62 del CST, que establece como justa causa de despido cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador.

Dentro del ordenamiento jurídico, el hecho de presentarse al trabajo en estado de alicoramiento puede constituirse en una justa causa de despido, si se considera grave por el juzgador, en función de las condiciones medioambientales del trabajo, o si, de antemano, ha sido considerado como grave en una convención colectiva, pacto colectivo, contrato laboral o reglamento interno de trabajo.

Prueba de alcoholemia

En el ámbito de las relaciones laborales, no existe ninguna norma que determine que las pruebas de alcoholemia están a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, precisó la Corte.

Por lo tanto, es legítimo que en determinados sectores de la producción y empresas, se mantengan dispositivos que permitan auscultar esa situación, dentro de una política válida de prevención y control de la accidentalidad.

Lo anterior aplica, sobre todo, cuando por las condiciones laborales o por el tipo de trabajo, la embriaguez pone en peligro la seguridad de las personas y de los bienes de la empresa. Tal es el caso de los operarios, pilotos, cirujanos, conductores de vehículos, entre otros, para quienes es claro que una alteración de sus condiciones físicas e intelectivas normales no solo pone en riesgo su integridad, sino la de la comunidad.

En ese marco, sostuvo que el trabajador debe asumir el uso de estos dispositivos como una carga legítima, no invasiva de sus derechos fundamentales, previamente concebida con fines adecuados y razonables, como la seguridad de todos los trabajadores y la prevención de la accidentalidad.

(Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL-8002 (38381), jun. 18/14, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno)

---

### **Luis Rafael Vergara es el nuevo presidente del Consejo de Estado**

La Sala Plena necesitó seis sesiones para elegir el remplazo de la magistrada María Claudia Rojas.

Vergara es abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Administrativo. En su desempeño en la función pública se destaca su paso al Ministerio de Agricultura, como secretario privado del jefe de la cartera; fue jefe de división, secretario general y director regional del extinto Inderena y abogado asesor y jefe de departamento de la Empresa de Energía de Bogotá.

Dentro del poder jurisdiccional ha ocupado cargos como el de magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre y del Superior de Cundinamarca (Sala Laboral).

El jurista recibió el respaldo de 21 de los 23 magistrados presentes en la Sala, que ahora deberá elegir al vicepresidente, cargo que actualmente ocupa la jurista Martha Teresa Briceño.

(Consejo de Estado Noticias, Comunicado, 03/04/2015)

---

Jueves 12 de Marzo de 2015

### **Celebración de contrato con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades**

Resulta tan reprochable el hecho que una persona actúe a sabiendas de que está desconociendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como el hecho de que se permita y avale con conocimiento de causa, que un ciudadano actúe con violación de aquel, y por ende, que se afecten de manera flagrante los principios de transparencia y la moralidad administrativa en la función pública, más aún cuando quien permite dicha conducta es un servidor público a quien le asiste de manera irrestricta la obligación de cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley.

En este sentido, para el Consejo de Estado no sólo se reprocha la actitud de quien incurre en la incompatibilidad, inhabilidad, impedimento o conflicto de intereses, sino también de aquel que a pesar de tener conocimiento de que las personas involucradas en determinado asunto no pueden hacer parte del mismo por disposición del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y decide actuar sin advertir y/o prevenir las consecuencias de la actuación correspondiente.

---

#### **EVENTOS Y OPORTUNIDAD PARA INTERPONER SÚPLICA**

### **La Nación sin ser titular de un derecho real no puede, con fines de 'publicidad', inscribir baldío en Registro Inmobiliario**

El Consejero Ponente: Enrique Gil Botero al resolver el recurso de súplica interpuesto por el Minagricultura, corrigió la parte resolutive del auto del 30 de julio de 2014 suplicado, y en su lugar dispuso suspender provisionalmente el inciso 2 del numeral 1 del artículo 8 y del artículo 38 del Decreto 1465 de 2013.

"El Despacho observa que el Decreto 1465 de 2013, va más allá de lo establecido por la ley 160 de 1994, al permitir que para inscribir el acto administrativo que inicia un proceso agrario y el bien objeto del mismo no se encuentre inscrito, se abra el folio de matrícula inmobiliaria a nombre del Estado; toda vez que la norma autoriza la inscripción únicamente cuando el bien se halle inscrito, por lo que resulta evidente

que el ejecutivo, al hacer uso de su potestad reglamentaria sobrepasa su competencia, y desconoce la jerarquía de la ley, al reglamentar aspectos que la misma no estableció.

Además, no abrir un folio de matrícula inmobiliaria para registrar el acto administrativo que inicia un proceso agrario de un bien que no se halla inscrito, de ninguna manera viola el principio de publicidad que caracteriza a la función registral, porque el mismo se predica de las actuaciones que se desarrollan tomando como objeto un bien que ya esté inscrito, y sobre el cual haya existido o exista un derecho real cierto que haya dado lugar a la inscripción del mismo”.

“Así pues, no se puede permitir que la Nación, con fines de ‘publicidad’ y sin ser todavía titular de un derecho real sobre el bien objeto del proceso agrario, se atribuya la inscripción del mismo en el Registro Inmobiliario, sin tener en cuenta que en el proceso agrario que hasta ahora se inicia los derechos reales que puedan recaer sobre el bien aún no son ciertos, fracturando la finalidad del proceso, que es definir la situación jurídica del predio y dar la oportunidad de que quien se crea con derecho sobre éste lo demuestre, y lo haga valer en el transcurso del mismo”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N48766 (00102-00) Nulidad-Simple 2014/12/03

---

## RESTITUCIÓN DE UN BIEN DE USO PÚBLICO

### **Como efectos de la sentencia de nulidad simple son ex tunc, juez puede fundamentar las consecuencias del mismo**

La Sala resalta que por mandato del parágrafo 1 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, “cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará”. “Para el análisis de este caso es necesario traer a colación la teoría de los motivos y finalidades relacionadas con los artículos 84 y 85 del C.C.A. que por diferentes jurisprudencias se ha venido desarrollando.

En efecto, el asunto analizado en el presente proceso reviste un especial interés para la comunidad ya que se trata de la restitución jurídica de un bien de uso público, que se debe destinar a la satisfacción de necesidades colectivas, que prevalecen sobre el interés individual; por lo tanto, es procedente la acción incoada por el actor de conformidad con la jurisprudencia transcrita”.

Respecto de las declaraciones contenidas en la parte resolutive de la sentencia de primera instancia "son la consecuencia lógica de la nulidad del acto demandado, es decir, el acto que ordenó la venta de un bien de uso público, que por su naturaleza no era enajenable debe revertirse, no solo anulando el acto respectivo sino fundamentalmente, determinando las consecuencias del mismo que no pueden ser otras que las de anular los registros que materializaron la enajenación".

Consejo de Estado CE-SEC1-EXP2014-N01421-01 Nulidad-Simple  
2014/09/18

---

### **Actividades propias de entidades estatales no pueden desarrollarse por trabajadores de empresas de servicios temporales**

Cuando a través de una empresa de servicios temporales (EST) se vincula a un trabajador para el ejercicio de las mismas funciones que han sido asignadas a los servidores de planta de una entidad estatal, y que hacen parte del giro ordinario de su objeto, se configura la figura del contrato realidad como consecuencia de la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

Así fue afirmado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, luego de indicar que el cumplimiento, en forma permanente, de funciones propias de la entidad que implican subordinación no puede delegarse a las EST, por no tratarse de labores ocasionales, accidentales o transitorias.

Según el alto tribunal, las necesidades de personal temporal de las entidades públicas sujetas al ámbito regulador de la Ley 909 del 2004 deben ser satisfechas mediante la creación de empleos de carácter temporal en las condiciones y con los requisitos previstos en dicha ley, y no mediante el empleo de otras herramientas jurídicas como lo sería la contratación de servicios personales con terceros, en donde, casi siempre, se presentan condiciones de subordinación en el cumplimiento de las funciones contratadas, que desdibujan el vínculo y esconden una verdadera relación de trabajo

(C.P. Gerardo Arenas Monsalve). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 05001233300020120027501 (32222013), 11/27/2014)  
Noticia generada en Mar. 12/15 (8:30 a.m.)

---

## **Extinción de contratos de los trabajadores oficiales afectados por la supresión de puestos de trabajo**

En tratándose de trabajadores oficiales, como lo ha explicado reiteradamente esta Sala, la extinción de los contratos de trabajo de los trabajadores afectados con la supresión de puestos de trabajo con características como la que acá se estudia, no podrá ser considerada como un despido con justa causa y en tal caso no perderán eficacia las normas contractuales o convencionales que garanticen la estabilidad en el empleo.

Corte Suprema de Justicia SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado ponente: CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014). Radicación n.º34781

---

## **Todas las entidades del Estado deben formular un Programa de gestión documental**

“El Decreto 2609 de 2012 en su artículo 10º dice “Todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual”, lo anterior quiere decir que el PGD se deberá formular o actualizar de acuerdo con el artículo 13º del Decreto mencionado, de tal manera que contenga un cronograma con las fases (elaboración, ejecución, seguimiento y mejora) proyectadas a corto, mediano y largo plazo.

Ahora bien, en concordancia con la Ley 1474 de 2011 y el referido artículo del Decreto 2609 de 2012, el PGD debe estar incluido en el Plan de Acción que la entidad publique en su página web”.

ArchivoGeneral-Concepto-2014-N0001818 2014/04/01

---

## **Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas**

“Independientemente del medio y soporte utilizado papel o electrónico y del sistema manual o del sistema de gestión de documentos electrónicos implementado en la entidad, se deberá analizar los procedimientos, las

tecnologías y los medios más adecuados para implementar la gestión de comunicaciones oficiales por medios electrónicos, teniendo en cuenta estándares de interoperabilidad para facilitar el intercambio de estos mensajes, así como los procedimientos para su preservación en el tiempo; en consecuencia, cualquiera sea el soporte en el cual se conserve o preserve la información, encuentra soporte legal y fuerza probatoria en el sistema jurídico colombiano, siempre y cuando mantenga su integridad como característica fundamental, de tal forma, que sí en algún momento son cotejados con los otros soportes, la información es la misma, es veraz”.

ArchivoGeneral-Concepto-2014-N0001820 2014/04/23

---

### **SIC determina costos de trámites de acceso a la información pública (12:34 p. m.)**

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de fijar las tasas aplicables a los trámites de acceso a la información pública, certificaciones y constancias que se surten ante este despacho y así cumplir con lo señalado en la Ley 1712 del 2014 (Ley de Acceso a la Información Pública) y el Decreto reglamentario 103 del 2015. La norma tiene aplicación en las peticiones elevadas por cualquier persona, sea natural o jurídica, para acceder a los trámites generales de competencia de la superintendencia.

Igualmente, la SIC elaboró una tabla donde presenta de manera detallada la descripción de cada uno de los elementos considerados, a efectos de realizar el ejercicio de costeo de los servicios de solicitud de información (que puede consultar en el documento anexo a esta noticia). Por último, adicionó el numeral 2.6. al Capítulo II del Título I de la Circular Única de 19 de julio del 2001, adoptada mediante la Circular Externa 10 del 2001, relativo a las tasas aplicables a los trámites. (Superindustria y Comercio, Resolución 9428, 3/6/2015) Noticia generada en Mar. 11/15 (12:34 p. m.)

---

### **Diferenciación entre la naturaleza de la divulgación política y la propaganda electoral**

La divulgación política es entendida desde el punto de vista institucional, esto es desde la perspectiva de los partidos y movimientos políticos, y se encamina al hecho de dar a conocer los principios, programas y realizaciones de tales organizaciones, al igual que su posición política

frente a los asuntos de interés nacional; es decir, que por medio de ella la respectiva agrupación difunde los contornos axiológicos, teleológicos y programáticos que la caracterizan, publicidad que no puede encaminarse a obtener apoyo electoral para una jornada electoral en concreto sino que por el contrario busca la adhesión a su militancia, y que por su carácter abstracto “podrá realizarse en cualquier tiempo.” (Art. 23).

A su turno en cambio, la propaganda electoral es la que pueden realizar los partidos y movimientos políticos, y en general cualquier organización política, y sus respectivos candidatos y demás personas que se interesen en ello, con el cometido específico “de obtener apoyo electoral.” (Art. 24).

Está ligada, por lo visto, a las campañas electorales emprendidas por los partidos y movimientos políticos y sus candidatos, no tanto con el ánimo de difundir la plataforma axiológica e ideológica de la correspondiente organización política, sino más exactamente con la finalidad de cautivar electores, para lo cual los aspirantes a cargos unipersonales pueden dar a conocer su programa de gobierno durante el período respectivo y los candidatos a corporaciones públicas pueden difundir la filosofía y pensamiento que se viven al interior de la organización.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA  
Demandante: Pedro Felipe Gutiérrez Sierra Demandado: Consejo Nacional Electoral – CNE Consejera Ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) Expediente: 110010328000201300030-00

---

### **CNE impone límites a la publicidad radial y escrita para elecciones de gobernadores y alcaldes**

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acaba de establecer el número máximo de cuñas radiales, avisos en publicaciones escritas y de vallas publicitarias que podrán contratar los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos para las elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y juntas administradoras locales, que se realizarán el próximo 30 de octubre.

Los límites a la propaganda electoral dependen de la categoría del municipio. En el Distrito Capital, cada organización podrá contratar hasta 70 cuñas radiales diarias, de máximo 30 segundos, distribuidas en

una o varias emisoras; hasta 12 avisos del tamaño de una página por edición, en publicaciones escritas, y tendrán derecho hasta 30 vallas. (Consejo Nacional Electoral, Resolución 0236, 3/3/2015) Noticia generada en Mar. 11/15 (11:30 a. m.)

---

Viernes 20 de Marzo de 2015

Cali

**Caducidad opera únicamente por el transcurso del tiempo y su término perentorio y preclusivo no se suspende**

La caducidad, por ser de orden público, es indisponible e irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, debe declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes, pues ella opera por el sólo transcurso del tiempo y su término perentorio y preclusivo, por regla general no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga (excepcionalmente, la caducidad podría interrumpirse, como sería el caso, por ejemplo, cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial).

Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Actor: Germán Recio Victoria y otro Demandado: municipio de Cali CONSEJERO PONENTE: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, doce (12) de febrero de dos mil quince (2015) Radicación: 76001233100020040027001(34.798)

---

**Aunque no existe posición uniforme para tasar perjuicios morales, sí se viola la Carta al aplicar test de proporcionalidad**

Dirigida contra la Sección Tercera del Consejo de Estado quien al aplicar, dentro del curso de un proceso de reparación directa, el test de proporcionalidad para tasar el monto de la indemnización de los perjuicios morales a que tienen derecho.

Advierten, que con dicha actuación se desconocieron parámetros y topes señalados para el efecto por la jurisprudencia del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Para resolver, la Corte desarrolló los siguientes temas: 1. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; 2. La causal de procedibilidad por defecto sustantivo en la modalidad del desconocimiento del precedente judicial; 3. El desconocimiento del precedente constitucional como causal específica; 4. La Violación directa

de la Constitución, y, 5. El principio de igualdad y el test de proporcionalidad.

Para la Corte, no se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, puesto que no existe una jurisprudencia uniforme sobre el método utilizado para la tasación de perjuicios morales dentro de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Pese a lo anterior, consideró que sí se incurrió en el defecto de violación directa de la Constitución por desconocer un precepto de rango Superior, al aplicar, para efectos de cuantificar los perjuicios morales de los accionantes el test de proporcionalidad, método que no está avalado ni es utilizado en otras decisiones adoptadas por la misma autoridad judicial accionada. Concede el amparo.

CorteConstitucional-T-2014-N0102 (T-4105910) Sentencia 2014/02/25

---

### **Alcaldes pueden fijar tarifa de la contribución de valorización**

Las ordenanzas y los acuerdos pueden delegar en las autoridades administrativas la fijación de las tarifas de las tasas y las contribuciones, pero deben establecer directamente el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, reiteró la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

En su opinión, dichas autoridades no pueden arrogarse facultades propias de las corporaciones de elección popular. Así las cosas, los alcaldes municipales tienen potestad para imponer la tarifa de la contribución de valorización, siempre y cuando el concejo haya determinado el método y el sistema aplicable, indicó la corporación

(C. P. Hugo Fernando Bastidas). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 70001233100020100018401 (19244), 2/26/2015) Noticia generada en Mar. 19/15 (4:31 p.m.)

---

### **El pacto de prórroga automática se encuentra viciado de nulidad absoluta en los contratos estatales.**

La prórroga automática pactada en los Contratos del Estado viola de manera flagrante los principios generales de libre concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia consagrados positivamente, no sólo en la Ley 80 de 1993,

sino también en la Constitución Política de 1991, encontrándose en consecuencia tal acuerdo viciado de nulidad absoluta.

En este sentido, sentido se pronunció el Consejo de Estado reiterando de otra parte que la declaración de caducidad de un contrato tiene como límite temporal para su ejercicio el plazo de ejecución estipulado, por ende, fenecido éste, la respectiva entidad pública contratante pierde la competencia para declararla.

---

**DNP debe garantizar que habitantes de la calle accedan a beneficios sociales del Sisbén, entre ellos la exoneración de pago por duplicado de cédula**

Para la Corte Constitucional, este segmento poblacional está imposibilitado para acreditar su pertenencia al nivel 0 del Sisbén, lo que no solo le impide acceder a la exoneración de este pago, sino que le imposibilita disfrutar de las demás garantías previstas para la población más carente de recursos.

Frente al eximente de pago por duplicado de la cédula, sostuvo, la herramienta legal disponible no es idónea para garantizar el derecho a la personalidad jurídica de los habitantes de la calle; si bien estos ciudadanos deben ubicarse en los niveles 0, 1, 2 y 3 de la encuesta, de acuerdo al artículo 5º de la Ley 1163 del 2007, la norma exige la presentación de la inscripción ante el Sisbén, trámite desproporcionado para este tipo de personas.

Así lo considera el alto tribunal, debido a que dicho registro se adelanta en el lugar de vivienda habitual del solicitante, lo cual resultaría imposible de cumplir en el caso en estudio; además, dijo, las listas censales que mantienen los entes territoriales y las certificaciones de las EPS-S no son válidas para acreditar pertenencia a estos niveles Sisbén.

Así las cosas, la Corte advirtió que las normas que pretenden proteger a los sectores más vulnerables no pueden caer en este tipo de incongruencias, al tiempo que hizo un llamado al Departamento Nacional de Planeación para que intensifique la inclusión de este grupo dentro del sistema, en el mediano plazo

(M. P. Gloria Stella Ortiz). (Corte Constitucional, Sentencia T-092, 3/5/2015) Noticia generada en Mar. 19/15 (4:18 p.m.)

---

## **Colegios deben responder por seguridad de sus alumnos en actividades extracurriculares**

El Consejo de Estado condenó al Municipio de Sonsón (Antioquia) a pagar más de 200 millones de pesos por la muerte de un joven que se ahogó en aguas del río Sonsón en octubre de 1996, cuando regresaba a su casa después de prestar el servicio social de Vigía de la Salud como requisito para obtener el grado de bachiller.

La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mélida Valle de De la Hoz, explicó que el servicio obligatorio estudiantil, por ser un componente integral del currículo y del proyecto educativo, constituye una actividad académica extracurricular que se encuentra dentro de los deberes de vigilancia de las instituciones educativas públicas, establecidas en el artículo 2347 del Código Civil.

El fallo señala que ese deber de vigilancia se extiende incluso a actividades académicas que tengan lugar por fuera del establecimiento educativo, como el servicio social educativo obligatorio, pues es un requisito para optar al título de bachiller, tal como lo define la Ley 115 de 1993.

Tal argumento fue rebatido por considerar además que la subordinación que existe entre alumnos y docentes genera una posición de garante, por tanto, el prestador del servicio está obligado a asumir el rol de garante de los derechos de quienes están bajo su custodia y cuidado.

(C. P. Olga Mélida Valle de la Hoz). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100019970318601(30061), 03/19/2015) Noticia generada en Mar. 19/15 (3:17 p.m.)

---

## **La firma digital es equivalente funcional de la firma manuscrita**

“En cuanto a la firma digital, de acuerdo con lo establecido por la ley 527 de 1999, es un equivalente funcional de la firma manuscrita y cuenta con los siguientes atributos jurídicos:

- Autenticidad: permite garantizar la identidad del emisor de un mensaje y/o el origen del mismo y tener la plena seguridad que quien remite el mensaje es realmente quien dice ser.
- Integridad: garantiza que el mensaje de datos o información electrónica no haya sido alterado ni modificado.

- No repudio: el emisor no podrá negar el conocimiento de un mensaje de datos ni los compromisos adquiridos a partir de éste”.

ArchivoGeneral-Concepto-2014-N0002258 2014/12/31

---

### **Por maltrato a animales en el país, Procuraduría pidió a tres ministros diseñar estrategias para sensibilizar a ciudadanos**

“Teniendo en cuenta los reiterados casos de crueldad hacia los animales que se han presentado en diferentes partes del país, la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de las funciones preventivas consagradas en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política y en el decreto 262 de 2000, le pidió a los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo Mejía; Educación Nacional, Gina Parody Decheona; y del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos; que diseñen estrategias de sensibilización que fomenten la cultura del buen trato animal.

Dicha petición la realiza el Ministerio Público a través de su Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. De igual manera, se dirigió a los mandatarios departamentales y alcaldes municipales, como instrumento fundamental en la creación de una conciencia colectiva de respeto y de consideración hacia los seres vivos en particular”.

---

### **Entidades públicas de Bogotá deben actualizar información sobre contingente judicial**

Mediante la Circular 33 del pasado 12 de marzo, la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá solicitó a las entidades y organismos públicos de todos los niveles y sectores, incluidas las empresas de servicios públicos domiciliarios, oficiales o mixtas, y entes autónomos, hacer seguimiento y actualizar la información relacionada con los procesos judiciales en los que esté involucrado el Distrito Capital, con el fin de dar cumplimiento a la calificación del tercer contingente judicial, el cual estará abierto hasta el próximo miércoles 25 de marzo, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 303 del 2007, relacionada con políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico.

El incumplimiento de estas obligaciones será reportado a los órganos de control competentes. (Secretaría General Alcaldía Bogotá, Circular 33, 3/12/2015) Noticia generada en Mar. 19/15 (10:18 a.m.)

---

### **9 de abril del 2015, día cívico en Bogotá, en memoria, reconocimiento y solidaridad con las víctimas del conflicto interno**

A través del Decreto 93 del pasado 12 de marzo, la Alcaldía de Bogotá declaró el 9 de abril de 2015 como día cívico, en memoria, reconocimiento y solidaridad con las víctimas del conflicto interno, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 141 y 142 de la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas).

Por lo tanto, no habrá actividades laborales en los organismos y entidades públicas de la ciudad, con el fin de que los servidores públicos puedan asistir a los eventos y actividades que se adelanten ese día. Se exceptúan de la medida las entidades que, por su naturaleza y misión, tengan como objetivo la prestación de servicios que demanden atención inaplazable a los ciudadanos.

La disposición convoca a la población para que se vincule y participe en la jornada. (Alcaldía de Bogotá, Decreto 93, 3/12/2015) Noticia generada en Mar. 19/15 (9:47 a.m.)

---

### **Corporaciones autónomas regionales solo pueden otorgar licencias ambientales para construir alcantarillados en su propia jurisdicción**

La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que de acuerdo con la ley y los reglamentos puedan producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente, introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requieren de una licencia ambiental, recordó el Consejo de Estado.

En ese orden, advirtió que la correspondiente licencia para la construcción y operación de sistemas de alcantarillado, interceptores marginales, sistemas y estaciones de bombeo y plantas de tratamiento y disposición final de aguas residuales de entidades territoriales solo puede ser otorgada por la corporación autónoma regional correspondiente a la jurisdicción en donde pretende desarrollarse la obra

(C.P. Maria Claudia Rojas Lasso). (Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 25000232400020030068701, 1/22/2015) Noticia generada en Mar. 19/15

---

### **En Bogotá, establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas que cumplan normas tendrán reconocimiento**

Como reconocimiento al cumplimiento de normas y parámetros legales que contribuyen a la calidad de los servicios que prestan los establecimientos de comercio dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, el Concejo de Bogotá creó, a través del Acuerdo 581 del pasado 9 de marzo, el sello seguro, que será expedido de manera periódica por la Secretaría Distrital de Gobierno que, a su vez, creará y mantendrá actualizada una página web en la que publicará esta información.

Para hacerse merecedor al sello seguro, los establecimientos deberán cumplir, entre otros deberes, con apertura de puertas hacia afuera, planes de evacuación e iluminación de corredores, conceptos favorables sobre uso del suelo, pólizas de responsabilidad civil extracontractual, convenios para el servicio de conductor elegido o taxi seguro, servicio de parqueadero con opción a dejar vehículos toda la noche con tarifa única, sistemas de ventilación artificial o natural, personal de seguridad identificado, cumplir horarios de funcionamiento, aislar el ruido, simulacros de evacuación anuales y difusión en redes sociales y página web de atención de quejas y reclamos.

(Concejo de Bogotá, Acuerdo 581, 3/9/2015) Noticia generada en Mar. 19/15 (9:27 a.m.)

---

### **Los correos son documentos electrónicos de archivo y se deben conservar**

“En primer lugar es necesario señalar que los correos son en sí mismos documentos electrónicos de archivo y por lo tanto se deben conservar como un solo archivo electrónico integral; cuando se abren archivos adjuntos a un correo electrónico (documentos en formato digital), para conservarlos en otros sistemas se debe reglamentar internamente el proceso, para evitar pérdida de los atributos de los documentos y su valor probatorio, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 9, integridad, de la Ley 527 de 1999: “(...), salvo la adición de

algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación”.

ArchivoGeneral-Concepto-2014-N0001362 2014/12/31

---

Jueves 26 de Marzo de 2015

### **Ley de Víctimas no ordena creación de rubros presupuestales a favor de las personerías**

Si bien el artículo 174 de la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas) indica que los alcaldes y concejos municipales deben garantizar a las personerías los medios y recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la atención de la población víctima, estos deben tener dentro de su plan de desarrollo programas y proyectos y programar dentro de sus presupuestos recursos propios, sin que ello implique el incumplimiento de los límites de gastos y transferencias a los órganos de control.

En reciente oficio, el Ministerio de Hacienda precisó que ni la ley en mención ni la Directiva 3 del 2011 de la Procuraduría General de la Nación ordenan la creación de rubros presupuestales a favor de las personerías, en perjuicio de previsto en las leyes 617 del 2000 y 1551 del 2012.

Adicionalmente, en cumplimiento de las labores asignadas, los judicantes pueden trabajar temas de derechos humanos y víctimas del conflicto, sin que esto implique costos adicionales, pues se trata de prácticas ad honorem.

(Minhacienda, Concepto 3596, 2/4/2015) Noticia generada en Mar. 25/15 (3:20 p.m.)

---

ESTA LEY NO CREÓ NINGÚN TRIBUTO

### **La Ley 181 de 1995 no autorizó a los municipios para crear una contribución con destino al deporte: Consejo de Estado**

Mediante el Acuerdo 021 de 2008 (25 de junio), el Concejo de Yopal creó y fijó los elementos esenciales de la contribución pro-deporte municipal. La Sala confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare que anuló ese Acuerdo tras concluir que el concejo se extralimitó en sus funciones al expedir tal normativa con fundamento en

el artículo 75 de la Ley 181 de 1995, dado que este no creó ni autorizó a los municipios para crear una contribución especial o 'sobretasa' con destino al deporte.

La Sala ha precisado que "las entidades territoriales no tienen competencia para crear una contribución con destino al deporte con fundamento en el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 [...] Teniendo en cuenta el anterior lineamiento jurisprudencial, que se reitera en esta oportunidad, se advierte que el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no creó ningún tributo.

Tampoco autorizó su creación, ni fijó con precisión y claridad los parámetros para establecer los elementos esenciales de algún gravamen.

Por lo tanto, "no puede sostenerse que a partir de dicha disposición exista una autorización a los municipios para crear una contribución especial o 'sobretasa' con destino al deporte". En consecuencia, con la expedición del acuerdo demandado se desconoció el principio de legalidad de los tributos, pues, sin fundamento legal, se creó la contribución pro deporte municipal y se fijaron los elementos esenciales de dicho tributo.

Ello, porque, el artículo 75 de la Ley 181 de 1995 no crea ni autoriza la creación de tributo local alguno, pues se limita a establecer los recursos con los que cuentan los entes deportivos nacionales, departamentales y municipales para el cumplimiento de sus funciones, dentro de los cuales están las rentas que creen las asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales".

Consejo de Estado CE-SEC4-EXP2015-N20654 (00152-02) Nulidad-Simple 2015/02/05

---

Estado debe reparar toda lesión a la libertad sexual de la mujer

**Existe responsabilidad estatal por afectación sicofísica derivada de procedimiento médico**

Así lo determinó la Sección Tercera del Consejo de Estado en una decisión que condenó al Instituto de los Seguros Sociales – ISS, en liquidación, por las lesiones que se le causaron a una paciente durante la práctica de una citología.

La Sala agregó que la circunstancia de la demandante no era una consecuencia que estuviera obligada a soportar, teniendo en cuenta ya se había practicado varios de estos procedimientos sin consecuencias.

“El bien jurídico lesionado en este tipo de eventos es la integridad psicofísica personal, al grado tal que se han proferido condenas penales en contra de los galenos o paramédicos (v.gr. enfermeras) que en procedimientos de citología han perforado el himen de sus pacientes”, precisó.

En este caso, aclaró, es necesario proteger la creencia sexual o social que la víctima tiene de su sexualidad, en tanto que es desde esa órbita que cobra sentido el valor del bien tutelable

(C. P. Olga Mélida Valle de la Hoz). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 05001233100019979934301 (30639), 03/25/2015)  
Noticia generada en Mar. 25/15 (2:22 p.m.)

---

### **Análisis de la Corte sobre la caducidad en los procesos de reparación directa, por falla en el servicio médico**

Indica que el fallo impugnado incurrió en defectos sustantivo y fáctico, al errar en la interpretación del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y decretar la caducidad de la acción de reparación directa por falla del servicio médico interpuesta en contra del ISS, contando el término desde el diagnóstico de la enfermedad y no desde el momento en que se determinó la pérdida de la capacidad laboral en un 72,5%. Igualmente, por omitir valorar las pruebas obrantes en el expediente, para determinar el término para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa.

Para resolver, la Sala reiteró jurisprudencia relacionada con las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; hace una caracterización del defecto sustantivo.

Analizó el tema de la caducidad en los procesos de reparación directa, por falla en el servicio médico. La Corte amparó el derecho fundamental al debido proceso en la acción de tutela interpuesta contra la providencia judicial, cuando se incurre en un defecto sustantivo al interpretar o aplicar la norma al caso concreto, por fuera del ámbito de interpretación razonable o, de la normatividad y la jurisprudencia. Igualmente precisó que se incurre en un defecto fáctico, al omitir valorar

las pruebas aportadas al proceso, por medio de las cuales se constata que los daños sufridos son de tracto sucesivo. Concede el amparo.  
Corte Constitucional-T-2014-N0075 (T-4062262) Sentencia 2014/02/07

---

### **Entidades públicas de Bogotá deben implementar acciones y procedimientos relacionados con el acceso a la información pública**

Por medio de la Circular 43 del pasado 20 de marzo, la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá recordó a las entidades y organismos públicos el deber de revisar de manera detallada las normas relacionadas con el acceso a la información pública, entre ellas los decretos 103 del 2015 y 1377 del 2013 y las leyes 1266 del 2008, 1581 del 2012 y 1712 del 2014, e implementar las acciones y procedimientos tecnológicos y jurídicos acordes con la defensa del derecho fundamental de acceso a la información, la prevención del daño antijurídico y la respuesta efectiva ante la actividad desarrollada por los órganos de control, en coordinación con las direcciones u oficinas jurídicas, oficinas TIC y web master o quienes cumplan sus funciones.

(Secretaría General Alcaldía Bogotá, Circular 43, 3/20/2015) Noticia generada en Mar. 25/15 (2:14 p.m.)

---

### **Reserva legal de la información no opera sobre todo el proceso público en la cual está inserta**

La reserva legal opera sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso público dentro del cual la misma se inserta. Esta regla aplica sobre todo cuando se trata de información en procesos judiciales. Por ejemplo, en un caso de violencia contra menores solo es reservado el nombre del menor o los datos que permitan su identificación y no el resto de información que reposa en el expediente, pues resultaría desproporcionado reservarla.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada precisó que cada uno de sus funcionarios tiene deber de conocer el régimen jurídico de cada uno de los documentos que crea, posee y controla, ya que, por ignorancia, puede incurrir en yerros tales como negar acceso a la información sobre la cual no procede reserva o, peor aún, publicar o permitir el acceso a información con carácter confidencial.

Así las cosas, al despachar un derecho de petición, el funcionario tiene la obligación de analizar el documento y darle el manejo pertinente.

(Supervigilancia, Concepto 20157200018493, 3/6/2015) Noticia generada en Mar. 24/15 (1:56 p.m.)

---

### **Confianza legítima no supone inmutabilidad del ordenamiento jurídico**

La buena fe y la confianza legítima no implican la petrificación de las reglas de Derecho, de forma que se conserven expectativas particulares, aseguró la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

De acuerdo con la sentencia, dichos principios no suponen la inmutabilidad del ordenamiento jurídico interno, pues pretenden garantizar que los cambios normativos respondan a criterios de seguridad jurídica, lo cual se logra evitando variaciones “irracionalmente consecutivas, arbitrarias, ajenas al interés general”.

La confianza legítima no es una garantía genérica de estabilidad del ordenamiento, ya que el interés general hace inevitable la modificación de las normas vigentes y, así, se afectan intereses individuales, resaltó la corporación.

En el caso analizado, indicó que la aplicación definitiva de la tarifa del impuesto de delineación urbana, fijada en un acuerdo expedido por el concejo de Medellín, que fue creado inicialmente como medida transitoria, no resultó violatorio de tales principios (C. P. Jorge Octavio Ramírez). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 05001233100020100048501 (20550), 3/12/2015) Noticia generada en Mar. 25/15 (8:20 a.m.)

---

### **Responsabilidad disciplinaria del abogado frente al ejercicio de su profesión admite mayor rigor**

La Sala parte del presupuesto de que el ejercicio de la abogacía, a diferencia de otras profesiones, admite la exigencia de mayor rigor en cuanto al comportamiento de los abogados, en todos los órdenes, en atención a la trascendente función como depositarios de la confianza de sus clientes y defensores del derecho y la justicia, tal como lo expresó la Corte Constitucional.

**Los servicios que el demandante prestó de manera subordinada, desvirtúan la existencia del contrato de prestación de servicios**

La Sala procedió a confirmar la decisión que accedió a las súplicas del actor y declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó pagar al actor las prestaciones sociales comunes que devengan los escoltas del DAS, a favor del accionante, al desvirtuarse las características del contrato de prestación de servicios, pues el demandante cumplía una función que podía ser desempeñada por personal de planta, las funciones o responsabilidades que se le habían asignado no eran temporales, pues no contaba con autonomía e independencia para realizar las labores encomendadas; permanentemente debía estar atento a las instrucciones que se le impartieran, estaba sujeto a un horario de trabajo, es decir, era dependiente y sometido a la subordinación, elementos propios de la relación laboral, no de un contrato de prestación de servicios.

Confirmó. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Contrato de Prestación de Servicios. Laboral. Subordinación.

---

**¿Los empleados del orden territorial tienen derecho al reconocimiento de horas extras?**

Precisando en primera medida que la jornada laboral establecida para los servidores públicos en el orden nacional como territorial, se determinó en 48 horas semanales, es procedente aclarar que tendrán reconocimiento de horas extras, los empleados que se encuentren en los niveles técnicos y asistencial, y que perciban asignaciones hasta \$1.197.798 y \$1.285.765 respectivamente, aclarando de igual modo que nunca será procedente el pago de más de 50 horas extras, a excepción de los conductores mecánicos que tendrán derecho al reconocimiento de hasta 100 horas extras.

Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Horas Extras. Orden Territorial. Departamento Administrativo de la Función Pública- Concepto 18381 de 2015- 2015-02-04

---

### **Parámetros que deben tener presente las entidades para otorgar permisos sindicales**

Las entidades Estatales deben establecer los parámetros bajo los cuales se concederán los permisos sindicales a los servidores públicos, que de conformidad con la normatividad vigente puedan gozar de éstos, correspondiéndole a los nominadores o funcionarios delegados para el efecto, expedir el acto administrativo de reconocimiento de los permisos sindicales, previa solicitud de los sindicatos, teniendo en cuenta tanto la atención oportuna de las peticiones que en este sentido éstos eleven, como la prestación eficaz del servicio público.

MINISTERIO DEL TRABAJO- Diciembre 23 de 2014- Concepto Jurídico 222218

---

### **La devolución de los aportes solo es viable para el régimen de ahorro individual con solidaridad**

Del presente caso es dable concluir que aceptar las pretensiones subsidiarias de la demandante, presentaría un vacío fáctico insalvable para la aplicación de la Ley 100 de 1993 que establecen la devolución de los aportes, pues esta figura solo está consagrada para el régimen de ahorro individual con solidaridad y para la época en que el demandante prestó sus servicios a la demandada esta modalidad no existía.

Además, para el tiempo en el que el cónyuge de la demandante laboró, como empleado público, no se hacían aportes a ninguna caja, y de la misma forma no se efectuaban descuentos para pensión, era la entidad a la que el prestaba el servicio la encargada de pensionarlo, una vez el trabajador acreditara los requisitos.

Confirma. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Documento disponible al público en marzo de 2015. Temas: Devolución de Aportes. Pretensiones Subsidiarias. Régimen de Ahorro Individual.

Extra

## **Esta es la sentencia que declaró inconstitucional la función de advertencia que tenía la Contraloría General de la República**

La Corte Constitucional determinó que este tipo de intervención en la función administrativa suponía la violación de la prohibición de coadministración que impuso la Constitución de 1991 al organismo de control fiscal (numeral 7 del artículo 5º del Decreto 267 del 2000). Concluyó que esta facultad no se adecuaba a la misión de vigilancia que el artículo 119 constitucional le confería, pues el tipo de control que ejercía a través de la norma retirada del ordenamiento tiene un nivel de intervención susceptible de generar sanciones; su rol vigilante, que sí se adelanta en el curso de la gestión administrativa de las entidades, apenas le permite observar y tomar nota de estas actuaciones, pero no intervenir frente a ellas, lo cual es propio, dice la sentencia, de la etapa posterior a la finalización del actuar del administrador.

“La función de advertencia representa una intervención previa del ente de control susceptible de incidir en la toma de decisiones administrativas y, por tanto, constituye una modalidad de coadministración”, sentenció la Corte, que a pesar de reconocer una consecuencia disuasiva para alcanzar fines legítimos en la función administrativa, se enfrenta a una restricción que le impide seguir teniendo vigencia. Sin embargo, subrayó, el control interno contemplado en la Ley 489 de 1998 (reglamentado, entre otros, por los Decretos 2145 de 1999 y 934 del 2014), la capacidad del contralor general para evaluarlo (numeral 6º del artículo 268 de la Constitución) y la labor de la superintendencias permite que se alcancen los objetivos que se pretendían concretar con la función de advertencia. Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Ernesto Vargas salvaron el voto (M. P. María Victoria Calle).

(Corte Constitucional, Sentencia C-103 (D-10404), 3/11/2015)

Noticia generada en Mar. 26/15 (9:52 a.m.)

---

## **Por muerte de bañista que se ahogó en piscina olímpica de centro recreativo, condenan a dos entidades municipales**

Para la Corporación, la obligación de contar con personal capacitado para prestar auxilio a bañistas en piscinas es inherente a ese servicio por lo que “el daño no es imputable a la propia víctima, sino a las entidades demandadas, porque su muerte no tuvo como causa los riesgos propios del agua, sino la falta de prestación de los primeros auxilios y su traslado inmediato a un centro hospitalario”.

“Si bien la obligación de contar con personas capacitadas para brindar el auxilio necesario a los bañistas no estaba explícitamente prevista en el ordenamiento jurídico, como lo está hoy, la misma resulta inherente a ese servicio, en tanto se trata de una actividad riesgosa, en relación con la cual las entidades responsables de la misma tienen una obligación de garante frente a los usuarios, como lo ha señalado la Sala en oportunidades anteriores”.

Por lo tanto, la Corporación consideró improcedente la impugnación realizada por la entidad demandada, quien alegaba que la muerte de un bañista dentro de una de las piscinas que administraba había sido su culpa exclusiva al ingresar voluntariamente al agua, tesis que no compartió La Sala ya que “el señor Víctor Manuel Vivas Higuera, por ser mayor de edad y haber ingresado voluntariamente a la piscina olímpica del centro recreativo de Paipa asumió los riesgos derivados de las condiciones físicas de aquélla: su profundidad, temperatura y falta de visibilidad.

Sin embargo, el daño no es imputable a la propia víctima, sino a las entidades demandadas, porque su muerte no tuvo como causa los riesgos propios del agua, sino la falta de prestación de los primeros auxilios y su traslado inmediato a un centro hospitalario, obligaciones que estaban a cargo del municipio de Paipa y del Instituto de Turismo de ese municipio”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2013-N26016 (00070-01) ARD-2013/02/28

Realizó: Claudia Salas Martínez  
Profesional Universitario – Dirección Jurídica  
Procedimiento Difusión de Información Jurídica  
Alcaldía de Santiago de Cali  
Teléfono oficina - 57-2 8896744  
WhatsApp: 3117704301  
Claudia.salas@cali.gov.co